

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	CLARA INES AGUDELO DE GODOY
DEMANDADO	LUZ ANGELA TABORDA MUÑOZ, YESENIA, VANESSA Y PEDRO JUAN GODOY TABORDA, HEREDEROS DE JUAN DIEGO GODOY AGUDELO
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.
RADICADO	05001 31 03 015 2016 01021 05
PROVIDENCIA	INTERNO 2022-235
TEMAS	AUTO INTERLOCUTORIO N° 033
.DECISIÓN	LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.
MAGISTRADA	ADICIONA
PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada principal y demandante en reconvención, frente al auto proferido el 31 de octubre de 2022, por el **JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

I. ANTECEDENTES

La señora CLARA INÉS AGUDELO DE GODOY formuló demanda en contra de LUZ ANGELA TABORDA MUÑOZ, YESENIA, VANESSA y PEDRO JUAN GODOY TABORDA y de los HEREDEROS DE JUAN DIEGO GODOY AGUDELO solicitando declaración de simulación del contrato de compraventa contenido en la escritura pública No. 10928 de septiembre 30 de 2004, de la Notaría 15 de Medellín, contrato celebrado entre la demandante como vendedora y el fallecido JUAN DIEGO GODOY AGUDELO como comprador, respecto de los inmuebles con Matrícula Inmobiliaria 001 - 215395 y 001-215398 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur; además, la consecuencial condena en costas.

Integrada la Litis, la señora LUZ ÁNGELA TABORDA MUÑOZ formuló demanda de reconvención solicitando se declare que la comunidad formada por LUZ ÁNGELA TABORDA MUÑOZ, YESENIA GODOY TABORDA, VANESSA GODOY TABORDA y PEDRO JUAN GODOY TABORDA es dueña en común y proindiviso de los inmuebles objeto de la demanda inicial y se ordene a la señora demandada CLARA INES restituirlos a la demandante y a la comunidad; además, se condene a la demandada al pago de frutos dada la calidad de poseedora de mala fe y, en costas.

El 2 de marzo de 2022 se dictó sentencia de primera instancia donde se declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la acción de simulación y la prosperidad de la acción reivindicatoria planteada en reconvención, ordenando a la señora CLARA INÉS AGUDELO DE GODOY la devolución de los bienes inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 001- 0215398 y 001-0215395; se negó la condena en frutos; se condenó en costas a la parte demandante principal - demandada en reconvención, fijándose como agencias en derecho la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La sentencia fue recurrida por ambas partes y en sede de segunda instancia con ponencia de la suscrita magistrada, el 18 de julio de 2022 se dictó sentencia confirmando la decisión de primer grado; allí se condenó en costas de segunda instancia a la parte demandante principal a favor de la demandada principal.

En providencia del 16 de agosto de 2022, el juez de primera instancia dispuso dar cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal.

Mediante auto del 8 de septiembre de 2022, el juez de primer grado aprobó la liquidación de costas realizada por el secretario del Despacho en la cual se señaló, en favor de LUZ ÁNGELA TABORDA MUÑOZ, YESENIA GODOY TABORDA, VANESSA GODOY TABORDA, PEDRO JUAN GODOY TABORDA y a cargo de CLARA INÉS AGUDELO DE GODOY, las siguientes sumas: (i) Agencias en derecho primera instancia \$5'000.000; (ii) Agencias en derecho segunda instancia \$2'000.000; (iii) Certificados de tradición inmuebles folio 48 cuaderno reconvención \$33.600; (iv) Notificación derecho de petición folio

189 cuaderno principal \$10.400 y (v) Notificación derecho de petición folio 193 cuaderno principal \$14.800, para un total de \$7.058.800.

II. LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión recurrió la parte demandada principal - demandante en reconvención señalando que se omitió incluir dos envíos de peticiones por correo certificado obrantes, el primero, en folios 166 a 176 *“del cual no aparece el valor en el expediente, pero se puede constatar que es porque no está escaneado o está extraviado el folio 165; en todo caso se ve claramente enviado como el resto de peticiones, y le corresponde el valor de 10.400”* y, el segundo, a folios 177 a 188, el cual si tiene factura; que también se omitió tener en cuenta doce (12) certificados de tradición y libertad aportados, cada uno por valor de \$17.000 pesos, para un total de \$204.000 pesos, los que obran en el expediente digital acápite 15.2 prueba documental.

Que la suma fijada por agencias en derecho es muy baja porque corresponde sólo a \$2.500.000 por demanda, discrepando de la aplicación que se hizo de los artículos 2 y 5 del Acuerdo No. PSAA16- 10554, debiendo el juzgado hacer uso de los criterios de naturaleza, calidad, duración, cuantía y otras circunstancias especiales, para establecer unas agencias en derecho más altas, teniendo en cuenta que son dos demandas declarativas, con una duración del proceso de 6 años; que se trata de un proceso conocido por dos Despachos, esto es, el Juzgado Cuarto Civil Municipal, inicialmente, y luego el Quince Civil del Circuito; que es un proceso frente al cual se decretó una nulidad y que implicó realizar nuevas actuaciones, donde también se dictó sentencia anticipada que quedó sin efectos por la nulidad; que la cuantía gira en torno a bienes de un valor superior a \$161.031.000 pesos; que tuvo participación de curador *ad litem* y herederos indeterminados; que la demanda de reconvención tuvo *“un exhaustivo”* trámite de reposición y apelación sobre la decisión inicial de rechazar la demanda, lo que se llevó un año aproximadamente; que las partes procesales son múltiples, especialmente la parte demandada, implicando cinco (5) interrogatorios de parte, como también la citación de múltiples testigos y trámite de variados oficios que se pidieron como pruebas en la contestación de la demanda de

simulación; que se trata de un proceso con trámite e inscripción de medidas cautelares y finalmente, la calidad de la representación judicial por el apoderado principal y los apoderados sustitutos.

El 31 de octubre de 2022 procedió el juzgado a decidir el recurso de reposición providencia donde el *a quo* repuso parcialmente la decisión para incluir \$204.000 por concepto de pago de certificados de tradición, denegando reponer en lo demás su determinación y concediendo la alzada.

El proceso fue repartido a este Despacho el 10 de noviembre de 2022, a efectos de decidir el recurso de apelación, siendo procedente resolver de plano conforme establece el artículo 326 del Código General del Proceso.

III. CONSIDERACIONES

De conformidad con la regla 5 del artículo 366 del Código General del Proceso la liquidación de expensas y el monto de las agencias en derecho, sólo podrán controvertirse mediante reposición y apelación, por lo que compete a este Tribunal el conocimiento de la alzada interpuesta contra el auto del 31 de octubre de 2022 que aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho en el proceso de la referencia.

Según lo dispone el artículo 365 del Código General del Proceso en la regla 1: *“se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”*; se permite también que se condene en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable la formulación de excepciones previas.

Pues bien, el concepto de costas procesales que en general comprende los gastos necesarios para obtener mediante sentencia el reconocimiento de un derecho, y de los cuales, por supuesto, hacen parte las agencias en derecho, está revestido, en cuanto a su imposición se refiere, de un criterio objetivo acorde con el cual las costas corren a cargo de la parte vencida, independientemente de la conducta que haya desplegado en el trámite del proceso.

Las agencias en derecho entonces, se relacionan directamente con la suma que el juez debe cuantificar a favor de la parte que resulta beneficiada con las costas y su finalidad es la de resarcir los gastos que debió erogar ésta para pagar los honorarios del abogado que la asistió en el proceso. Con todo, ocurre que para proceder a su fijación el juez no goza de absoluta libertad, porque como bien lo señala el artículo 366 en la regla 3ª inciso segundo del Código General del Proceso, las agencias en derecho se fijarán teniendo en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Así las cosas, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554, por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho por parte del Consejo Superior de la Judicatura, normativa que resulta aplicable al presente proceso dada la fecha de presentación de la demanda, las tarifas de las agencias en derecho en los procesos declarativos de mayor cuantía y en primera instancia, se fijan así: *“entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.”*

De manera que, teniendo en cuenta el Acuerdo No. PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias pueden fijarse en un monto que equivalga entre el 3% y el 7.5% de la suma establecida como cuantía, teniendo en cuenta por parte del juez, la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el apoderado y la cuantía del proceso sin que se exceda los topes de dichas tarifas.

Ahora, el apoderado de la parte demandada principal y demandante en reconvencción recurre el auto que aprobó la liquidación de costas, reclamando tanto por los gastos del proceso, como por las agencias en derecho, siendo pertinente analizar su inconformidad en cada punto.

En cuanto a los gastos del proceso solicitó el recurrente se incluya el dinero que se gastó en dos envíos de peticiones por correo certificado obrantes, el primero, en los folios 166 a 176 y, el segundo, a folios 177 a 188. Revisado el expediente se advierte, en igual sentido al que determinó el juez de primer grado al resolver la reposición, que respecto de la primera petición (folios 166 a 176) no obra en el plenario factura del envío, no pudiendo entonces este Despacho reconocer con sustento en suposiciones del valor de otros envíos, gastos que no se encuentran debidamente demostrados. Y si lo

acaecido es, como arguye el recurrente, que hay un folio extraviado, ello implicaba que el recurrente pidiera la reconstrucción parcial del expediente, trámite que no se evidencia efectuado y que impide a este Despacho reconocer, se insiste, con suposiciones, un gasto no demostrado, máxime que el *a quo* al resolver la reposición detalló el contenido del sobre obrante en el folio que extraña el inconforme, no habiéndose incluido en dicho detalle la factura extrañada.

Respecto de la segunda petición (folios 177 a 188), sobre la cual extrañamente no se pronunció el *a quo* al resolver la reposición, sí obra en el expediente a folio 177 la factura-guía de envío N° 949365776 donde consta que la parte demandada asumió \$14.900 por concepto de remisión de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores indagando sobre el número de ocasiones y fechas en que el señor JUAN DIEGO AGUDELO GODOY salió del país, lo que implica que deba adicionarse el auto de primer grado para reconocer la aludida suma.

En lo relativo a las agencias en derecho, no le asiste razón en su reproche porque, aunque se coincide con el inconforme en que la suma para establecer la cuantía es de \$161.031.000 de acuerdo al último avalúo catastral de los inmuebles en litigio, lo cierto es que la suma fijada por el juez de primer grado como agencias en derecho por la primera instancia, esto es, \$5.000.000 corresponde al 3.1% de dicho avalúo, monto que está dentro de los límites establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554.

Aduce el recurrente que, debe tenerse en cuenta que en el proceso se tramitaron dos demandas; también la duración del proceso, el que fue conocido por dos Despachos y que tuvo una nulidad, así como que debió participar curador *ad litem* de herederos indeterminados; la pluralidad de personas integrantes de las partes; los recursos respecto del rechazo inicial de la demanda; la práctica de pruebas; las gestiones probatorias y la calidad de la defensa de la parte a quien le prosperaron las pretensiones, pero, aunque el recurrente realiza una minuciosa relación de las labores que como abogado realizó al interior del proceso, realmente no se evidencia una situación de relevancia tal que implique aumentar la suma fijada por el *a quo*.

Es que la participación de curador *ad litem* y la pluralidad de personas que conforman la parte demandada principal, además de ser algo que con regularidad se presenta en los procesos civiles y que en este caso no es de relevancia especial porque se trata solo de cuatro (4) integrantes de la parte demandada, es aspecto que realmente afecta a la parte demandante principal, quien debe surtir mayores actuaciones e incurrir en mayores gastos para vincular a su contraparte; por ende, siendo la parte ahora recurrente la **demandada principal**, no se evidencia cómo es que dichas situaciones le aumentaron considerablemente su actividad; en similar sentido, el hecho de que se hubiese presentado demanda de reconvención no implica mayor actuación que se salga de las posibles defensas de la parte demandada principal y demandante en reconvención, quien por el contrario se beneficia de presentar allí mismo su contrademanda, al no tener necesidad de vinculación adicional de la parte contraria, lo que le resta ese esfuerzo importante y fundamental que está dado por la notificación inicial de la parte que debe resistir sus pretensiones.

En cuanto a la formulación de recursos respecto del rechazo inicial de la demanda, la práctica de pruebas y las gestiones probatorias, se trata de labores normales que un profesional del derecho debe efectuar al interior de un proceso declarativo, extraño sería, por el contrario, que un proceso declarativo no tuviera necesidad de ejercer ningún recurso y que se prescindiera de la práctica de pruebas. Entiende este Despacho que al referir el acuerdo plurimencionado a circunstancias especiales y relevantes para establecer las agencias en derecho, alude a situaciones que impliquen desgaste e intervención adicional, por fuera de la normalidad de un proceso, por parte de los apoderados, como por ejemplo, múltiples incidentes que conlleven el decreto y práctica de pruebas adicionales a las del proceso principal, diligencias por fuera del despacho, defensa frente a intervenciones de terceros, entre otras, situaciones que no se presentaron en este caso, donde la nulidad que menciona el recurrente fue declarada de oficio; la reanudación de la actuación implicó mayor carga pero para la parte demandante principal que debió vincular a los herederos indeterminados del señor Juan Diego Agudelo Godoy y, donde se realizaron tres (3) sesiones de audiencias **virtuales**, en las que pudo agotar todas las etapas hasta la sentencia.

En lo atinente al decreto de cautelas es asunto que de cara a su solicitud y trámite no implica un desgaste extraordinario del apoderado, especialmente en este caso donde la cautela fue pedida por la parte demandante **principal** y se trató de una medida cautelar típica de inscripción de la demanda sobre bienes inmuebles, que solo requiere entrega del oficio en la oficina de instrumentos públicos correspondiente.

Finalmente, reprocha el recurrente por la duración del proceso y, aunque es aspecto que sí resulta relevante de cara a la fijación de las agencias en derecho y, a pesar de evidenciarse que el proceso tuvo una duración mayor a la establecida en la actualidad para los procesos declarativos (un año y seis meses), realmente dicha situación por sí sola no implica que se deba aumentar el porcentaje establecido por el *a quo*, máxime que en este asunto una parte de la demora se debió a la pandemia derivada del virus covid 19, que conllevó a la suspensión de los términos judiciales por varios meses y a la necesidad de digitalización de los expedientes, situaciones que no implicaron actuación adicional de las partes, sino del juzgado para adaptarse a la digitalidad y, que incluso, ofrece beneficios a las partes y sus apoderados debido a la facilidad para atender audiencias virtuales sin desplazarse de su domicilio o lugar de trabajo, de lo que pudo favorecerse el ahora recurrente.

Por lo anterior, considera este Despacho que, la liquidación de las agencias en derecho se hizo de forma proporcional y conforme a los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y el Código General del Proceso, es decir no se fijó una suma inferior al límite que la ley otorga para aplicar en el caso específico y no existen circunstancias excepcionales que impliquen la necesidad de aumentarla, por ello lo procedente es confirmar el proveído atacado, con la adición ya anunciada sobre el gasto de remisión de una petición no reconocido por el *a quo*.

CONCLUSIÓN.

El corolario de lo expuesto es la decisión que habrá de adoptarse de modificar la providencia impugnada para incluir como gasto asumido por la parte demandada principal y demandante en reconvención la suma de

\$14.900 con sustento en la factura-guía de envío N° 949365776 obrante a folio 177.

Sin lugar a la imposición de costas en esta instancia debido a que no se causaron.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR el auto de fecha 31 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín para incluir en los gastos que deben reconocerse a la parte demandada principal y demandante en reconvención, la suma de \$14.900 con sustento en la factura-guía de envío N° 949365776 obrante a folio 177.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, por las razones aquí expuestas, la providencia aludida.

TERCERO. Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma electrónica de acuerdo al artículo 105 del Código General del Proceso en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:
Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1c13840d5fcaa221b2bfdeff9c779ed996c053652cece42370e46cb1a228e65f**

Documento generado en 16/03/2023 04:27:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>